

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia

JUZGADO : 24° Juzgado Civil de Santiago

CAUSA ROL : C-118-2021

CARATULADO : RAMOS/ ESTADO DE CHILE

Santiago, a veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Con fecha 6 de enero de 2021, rectificada el 12 de enero del mismo año, don Boris Paredes Bustos, abogado, en representación de doña **Mireya Alejandra Ramos Jiménez**, profesora, domiciliada en Av. Collao N°1952, Torre I, depto. 133, Concepción, dedujo demanda de indemnización de perjuicios, en juicio ordinario de mayor cuantía, en contra de **Fisco de Chile**, representada por el presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Juan Peribonio Poduje, abogado, ambos domiciliados en Agustinas 1687, Santiago, pretendiendo se condene a la demandada a pagar a la actora, la suma de \$200.000.000, por concepto de daño moral que ha padecido con ocasión de las torturas de que fue objeto, o la suma que el tribunal estime en Justicia, más intereses, reajustes y con costas.

Sustenta su pretensión en que la actora, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura, Valech I N°20.053, fue detenida junto a su hermano menor, cuando tenía 17 años de edad, en su domicilio de aquel entonces en la ciudad de Coronel, a las 4.00 AM, del 11 de septiembre de 1986, por civiles de la



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PVXWXFPDJFL

CNI, de forma ilegal y sin exhibir orden judicial alguna, por 10 efectivos que allanaron su hogar, donde estaban, solamente, sus hermanos Tomás y Cristián, de 19 y 15 años, ya que sus padres trabajaban en turnos de noche, tratando su hermano mayor de impedirlo, pero fue brutalmente golpeado, rompiendo techos y paredes y llenando la casa de panfletos, instructivos, explosivos y otros elementos para acusarlos de terroristas. También fueron amenazados con ser asesinados, sino colaboraban informando sobre otros jóvenes de las juventudes comunistas e inculparlos del atentado a Augusto Pinochet.

Relata que fueron vendados y llevados afuera, donde había otros detenidos de las Juventudes Comunistas, de la misma región, siendo conducidos a calle O'Higgins 239, de la ciudad de Concepción, donde escuchó gritos y llantos de personas torturadas, lugar en que los ingresaron a una habitación con camarotes de fierro, sin colchón, ni frazadas y donde estaban otros detenidos en silencio y aterrorizados o enajenados.

Señala que llegó su turno de interrogación, la desnudaron, con los ojos vendados y manos atadas, la insultaron, la mojaron y luego la golpearon, con patadas y golpes en el suelo, estando detenida hasta el 16 de septiembre de 1986, sin comer. Escuchó a su hermano que lo torturaban con corriente eléctrica en los testículos. El segundo o tercer día, fue sometida a más golpes, duchas de agua fría, golpes de electricidad, patadas y amenazas permanentes, hasta que sus padres, con ayuda de la Vicaría de la Solidaridad, dedujeron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Concepción, siendo puesta a disposición de la Fiscalía Militar de esa ciudad, donde se le acusó de infracción a la Ley 17.798, siendo ingresada el mismo día al Centro de Orientación Femenino de Concepción, lugar en que estuvo



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PVXWXFPDJFL

encarcelada hasta el 30 de octubre de 1986. Después al ser puesta en libertad, sufrió persecución política, no pudiendo ingresar a la Universidad, sino hasta dos años después de obtener su libertad.

Alega que la tortura física y psicológica sufrida por ella, modificó su proyecto de vida y comenzó a tener enfermedades físicas y afecciones psicológicas, las que permanecen presentes, como asma y alergias respiratorias, frente a situaciones de estrés, soriasis, miomas uterinos y hemorroides internos, atribuibles a las torturas, además, de crear gran desconfianza en las personas.

Expresa que resulta evidente el perjuicio psíquico, físico y moral, provocado por el Estado de Chile, durante el gobierno dictatorial, daño que sería obvio, público y notorio, el que avalúa en la suma de \$200.000.000.-

Reclama que el Estado es civilmente responsable de los hechos narrados, perpetrados por agentes de la Central Nacional de Informaciones, integrada por miembros del Ejército de Chile y de otras ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden, cuya responsabilidad se ha reconocido en Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación e Informe sobre Prisión Política y Tortura, la que emana de la Constitución y que ya existían, incluso, en la Constitución de 1925, en sus actas constituciones y en los artículos 4, 10 n°1 y 9, debiendo responder el Estado de todo daño provocado a los particulares en su ejercicio.

Invoca para su pretensión lo previsto en los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 38 de la Constitución Política de la República; 4 y 42 de la Ley N°18.575; 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PVXWXFPDJFL

Derechos Humanos; 27 de la Convención de Viena; Resolución 60/147 de Asamblea General de Naciones Unidas, alegando que la indemnización debe ser proporcional al daño provocado, cierta y real.

Cita una serie de jurisprudencia de la E. Corte Suprema, que avalaría su pretensión.

Indica que se darían todos los presupuestos que obligan al Estado a indemnizar los perjuicios causados, existiendo un daño moral; una acción de agentes del Estado; un nexo causal; y no existen causales de justificación que eximan al Estado de su responsabilidad.

Con fecha 12 de febrero de 2021, contesta la demanda el Fisco de Chile, solicitando su rechazo, con costas, o en subsidio, se rebaje sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido, con fundamento, en primer lugar, en la excepción de reparación integral, por haber resultado ya indemnizado la actora, dado que conforme al ámbito de la llamada justicia transicional, se establecieron medios de reparación, por los cuales el Estado ha desembolsado a diciembre de 2019, una suma total de \$992.084.910.400, entre los cuales, se concedió a la demandante una pensión al amparo de la Ley N°19.992, anual y reajutable de \$1.353.798, para beneficiarios menores de 70 años; de \$1.480.284, para beneficiarios de 70 o más años y de \$1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años, adicionalmente un aporte único de reparación Ley N°20.874 de \$1.000.000. Se agrega que concedieron otros derechos, como gratuidad en prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud en los servicios de salud del país, con la sola inscripción en la correspondiente



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PVXWXFPDJFL

oficina, cuyo programa cuenta con equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva a los beneficiarios del programa, que incluye apoyo técnico y rehabilitación física, cuyo presupuesto, el año 2020, alcanzó a la cantidad de M\$6.543.883; en el ámbito educacional, se concedieron becas de estudios superiores y gratuidad en educación básica y media; y beneficios en vivienda a través de subsidios.

Indica que lo anterior, es sin perjuicio, de las reparaciones simbólicas, como actos positivos de reconocimiento, dirigidos esencialmente, a reducir el daño moral padecido por las víctimas de violaciones a los derechos humanos, como lo son un memorial en el Cementerio General en Santiago; el establecimiento del Día Nacional del Detenido Desaparecido, fijado para el 30 de agosto de cada año; la construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos; establecimiento del Premio Nacional de los Derechos Humanos; y la construcción de diversos memoriales y obras a lo largo del país, todo lo cual ha implicado grandes gastos económicos del Estado.

Expresa que la Corte Interamericana de Justicia ha valorado el esfuerzo del Estado de Chile, en su política de reparación de violaciones a los derechos humanos e, incluso, ha rechazado pretensiones indemnizatorias de personas que ya han recibido beneficios del Estado por ese motivo.

Alega que, por lo demás, resultaría incompatible la pretensión indemnizatoria de la actora, con los beneficios establecidos en la Ley N°19.123 y evitar así, también, un sistema compensatorio que no genere desigualdades.

Opuso, además, en subsidio de la anterior, la excepción de prescripción extintiva de la acción deducida, la que sustentó en



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PVXWXFPDJFL

lo previsto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación al artículo 2497 del mismo cuerpo legal, considerando que aún, pudiendo entenderse suspendida la acción durante la dictadura militar, por imposibilidad de la víctima de poder ejercer dicha acción, igualmente desde la restauración de la democracia a la fecha de notificación de la demanda producida el 27 de enero de 2021 habría transcurrido en exceso el plazo de prescripción, como también, el plazo de extinción ordinaria del artículo 2515 del Código Civil.

Expresa que la imprescriptibilidad es una cuestión extraordinaria y requiere, siempre, de declaración explícita, que en el caso no existiría, además, que la indemnización, en caso alguno, puede tener un carácter punitivo, ni de desigualdad, precisando que ninguno de los instrumentos internacionales de derechos humanos aludidos por el actor establecen la imprescriptibilidad de acciones patrimoniales derivadas de delitos de lesa humanidad, ni prohíben la aplicación del derecho interno, citando y reproduciendo al efecto un fallo de la Corte Suprema de unificación de jurisprudencia, de 21 de enero de 2013.

Alega, por otra parte, que la indemnización pretendida resultaría excesiva, la cual no puede constituir una fuente de lucro o ganancia, debiendo el tribunal, en subsidio, regular el daño moral, considerando los pagos ya recibidos del Estado, sin atender a la capacidad económica del mismo.

En cuanto al pago de reajustes e intereses, hizo presente que solo procederían una vez que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada, dado que solamente en esa época se establecería la obligación.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PVXWXFPDJFL

Con fecha 17 de febrero de 2021, replica la actora, reiterando lo expresado en su demanda y señalando, respecto de la excepción de reparación integral, que los pagos, si bien han tendido a reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, solo corresponden a pensiones de sobrevivencia, que no cubren todo el daño y dolor producidos, agregando que la pensión de reparación, según ley 19.123, es compatible con cualquier otra.

En cuanto a la prescripción, reiteró su alegación de la supuesta imprescriptibilidad de la acción civil deducida, precisando la acción tendría carácter constitucional, conforme los tratados internacionales ratificados por Chile.

Precisa que al faltar norma expresa que regule la prescripción de las acciones de reparación por violaciones a los derechos humanos, debe aplicarse el derecho público como el derecho internacional.

Por último, respecto del monto demandado, reiteró lo expresado en su demanda, señalando que el tribunal fija el monto definitivo, haciendo presente que éstos se habrían aumentado en el tiempo, por los diversos tribunales; y que los reajustes e intereses, también, serán determinados por el tribunal respecto de su exigibilidad.

Con fecha 26 de febrero de 2021, duplica la demandada, ratificando lo expresado en su contestación.

Con fecha 16 de marzo de 2021, se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que obra en autos.

Con fecha 24 de agosto de 2022, se citó a las partes para oír sentencia.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PVXWXFPDJFL

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la demandante, doña **Mireya Alejandra Ramos Jiménez**, dedujo demanda de indemnización de perjuicios, en juicio ordinario de mayor cuantía, en contra de **Fisco de Chile**, ambos ya individualizados, pretendiendo se condene a la demandada a pagar a la actora, la suma de \$200.000.000, por concepto de daño moral que ha padecido con ocasión de las torturas de que fue objeto, o la suma que el tribunal estime en Justicia, más intereses, reajustes y con costas.

Funda su pretensión en los argumentos de hecho y fundamentos de derechos relatados latamente en lo expositivo del presente fallo.

SEGUNDO: Que han resultado hechos no controvertidos en el proceso, aceptados por ambas partes, que la actora es, efectivamente, una víctima de violación de derechos humanos durante el desarrollo de la Dictadura Militar, y que el Estado ha efectuado acciones de reparación, mediante pensiones asistenciales y simbólicas.

TERCERO: Que la discusión esencial del pleito judicial, ha rondado en cuanto a si las acciones de reparación efectuadas por el Estado habrían sido suficientes para reparar el daño sufrido por la actora; en si la acción deducida se encontraría prescrita; como también, en si la pretensión indemnizatoria de la actora resultaría desproporcionada, relacionado ello con la extensión que habría tenido el daño moral que padeció aquella.

Conforme al silencio de la demandada y de la actora, en su caso, deben estimarse controvertidos, además, los alcances de los apremios que habría padecido la actora en los periodos en



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PVXWXFPDJFL

que estuvo detenido por agentes militares, y las secuelas físicas que se habrían derivado de éstos.

CUARTO: Que la actora rindió la siguiente prueba, a fin de justificar sus argumentos:

Documental:

- a) Copia de artículos, sobre algunos factores de daño a la salud mental; algunos problemas de salud mental detectados por equipo psicológico-psiquiátrico; Tortura, tratos crueles e inhumanos en 1980; Trabajo Social, una experiencia solidaria en la promoción y defensa de los Derechos Humanos; y Salud Mental y violaciones a los derechos humanos, todos emanados de la Vicaría de la Solidaridad, agregados al expediente digital con fecha 27 de septiembre de 2021, no objetados;
- b) Copia de Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura Valech I, agregado al expediente digital con fecha 14 de julio de 2022, en folio 44, no objetado;
- c) Copia de nómina de personas reconocidas como víctimas de prisión política y tortura, agregada al expediente digital con fecha 14 de julio de 2022, en folio 44, no objetada;
- d) Copia de carpeta de antecedentes de la actora, del Instituto de Nacional de Derechos Humanos, agregada al expediente digital con fecha 14 de julio de 2022, en folio 44, no objetada;
- e) Certificado de nacimiento de la actora, agregado al expediente digital con fecha 14 de julio de 2022, en folio 44, no objetado; y



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PVXWXFPDJFL

f) Copia de Informe de daño de la actora, a consecuencia de prisión política y tortura, emanado del Programa PRAIS, agregado al expediente digital con fecha 14 de julio de 2022, en folio 45, no objetado.

QUINTO: Que, por su parte, la demandada rindió la siguiente prueba documental para justificar sus defensas o desvirtuar los argumentos y pruebas del actor:

Copia de Oficio Ord. DSGT N°4792-762 del Instituto de Previsión Social, agregado al expediente digital con fecha 5 de agosto de 2022, en folio 47, no objetado.

SEXTO: Que, así las cosas, corresponde valorar las probanzas rendidas por las partes, la que se ha limitado a instrumentos. En este sentido, no se registran impugnaciones, fundadas en causal legal, respecto de ninguno de los que fueron puestos en conocimiento de la contraria, ni alegaciones respecto de las virtudes formales de los públicos. En consecuencia, se reconoce pleno valor probatorio a los instrumentos señalados, según su naturaleza, salvo los documentos privados emanados de terceros que no hayan sido ratificados en juicio, los que, en todo caso, serán considerados como indicios, como ocurre con el caso de la prueba documental médica acompañada por la actora; y se tienen como instrumentos públicos en juicio, los que tengan dicha naturaleza.

SÉPTIMO: Que conforme a los hechos reconocidos por las partes, se debe tener como hechos justificados en el proceso, la veracidad de haber sido la actora una prisionera política del régimen militar en dictadura, producido con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, y víctima de violación a los derechos humanos, por torturas efectuadas por agentes de dicha



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PVXWXFPDJFL

Dictadura Militar; y que resulta efectivo, también, que la actora ha sido beneficiada con reparaciones de parte del Estado, por su calidad de víctima de torturas, recibiendo, al menos, ciertas pensiones asistenciales, lo cual se desprende del reconocimiento efectuado en el escrito de réplica, donde las estimó insuficientes; y que ha recibido, también, asistencia especializada, en el Programa PRAIS, dirigido a víctimas de violaciones a los derechos humanos, al menos de carácter psicológico, según consta del propio informe acompañado por ésta, en folio 45, no objetado.

OCTAVO: Que previo a verificar si se dan los presupuestos para acceder a la responsabilidad extracontractual del Estado, por acciones de sus agentes, deberá revisarse si se dan los presupuestos legales para acceder a la primera defensa argumentada por el Fisco de Chile, esto es, la excepción de pago deducida.

NOVENO: Que la excepción de reparación integral e improcedencia de la indemnización, deducida por la demandada se ha sustentado, esencialmente, en haberse producido una reparación del daño moral por la demandada, conforme a lo previsto en la Ley N°19.123, y en que la actora habría recibido, puntualmente, beneficios de la Ley N°19.992 sobre prisioneros y torturados políticos, en virtud de haber sido calificado como víctima de presión política y tortura del Informe de la Comisión Valech, consistente en pensión asistencial; un aporte único de reparación Ley 20.874, de \$1.000.000; además, de beneficios en derecho de gratuidad en prestaciones médicas, según Ley N°19.234, otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud, en todos los servicios de salud públicos del país, que comprenden profesionales de atención exclusiva;



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PVXWXFPDJFL

beneficios educacionales, consistentes en becas para la víctima, para un hijo o para un nieto de aquel; y beneficios de vivienda, correspondientes a subsidios para tal efecto.

DÉCIMO: Que como ya ha quedado asentado en la motivación séptima, la actora ha reconocido en juicio, en sus escritos de contestación y réplica, que son efectivas las prestaciones económicas que ha percibido del Estado, en su calidad de víctima de prisión política, tortura y exonerada política y que, por tanto, se le ha hecho pago de diversas sumas que comprenden a tales beneficios, no precisados por ella; como también, que ha recibido asistencia profesional del programa PRAIS, al menos, de carácter psicológico, todas las cuales contienen una valoración patrimonial importante, la que no ha sido precisada en juicio.

Por otra parte, conforme el mérito del informe emitido por Instituto de Previsión Social, de fecha 8 de marzo de 2021, agregado al expediente digital con fecha 5 de agosto de 2022, en folio 47, no objetado, puede establecerse por el tribunal, fehacientemente, que la actora ha percibido como beneficios de reparación de las leyes números 19.992 y 20.874, desde marzo de 2005 a febrero del año 2021, las sumas de \$29.299.303, por concepto de pensiones asistenciales, de \$1.000.000, referido a aporte único Ley N°20.874, \$518.325, por concepto de aguinaldos, siendo el total percibido de \$30.817.628, correspondiendo la pensión actual a esa época de \$194.727.-

UNDÉCIMO: Que según lo previsto en el artículo 2° de la Ley N°19.123, en su parte pertinente, se dispone: *“Le corresponderá especialmente a la Corporación:*



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PVXWXFPDJFL

1.- Promover la reparación del daño moral de las víctimas a que se refiere el artículo 18 y otorgar la asistencia social y legal que requieran los familiares de éstas para acceder a los beneficios contemplados en esta ley.”

De acuerdo a dicha disposición legal, resulta evidente que el objeto de las prestaciones que dicha norma contempla, están destinadas a la reparación del daño moral de las víctimas de presión política y tortura, como es el caso del actor de autos.

DUODÉCIMO: Que de las demás disposiciones de la citada Ley N°19.123, que se refiere a la creación de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación y que establece Pensión de Reparación y otorga otros beneficios en favor de las personas que señala, resulta de manifiesto el esfuerzo que ha efectuado el Estado de Chile, para reparar, al menos en parte, el daño moral sufrido por las víctimas de tortura y prisión política durante el régimen militar, a través de la estructuración de pensiones y otros beneficios para los afectados y su grupo familiar, como también, reparaciones simbólicas, referidas a la memoria de los excesos y delitos cometidos en contra de las víctimas de torturas y prisión política de la Dictadura Militar, como memoriales, monumentos, efemérides, museos y otros.

Cabe agregar que la estructura y prestaciones disponibles para la demandante, en materia de salud y de forma preferente, a través del programa PRAIS, implican un valor monetario adicional a disposición de la actora, independientemente de si ésta opta o no por ocuparlos, lo que ocurre, también, con los beneficios de educación y vivienda.

DÉCIMO TERCERO: Que conforme a lo asentado precedentemente y lo reconocido por la actora en el proceso,



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PVXWXFPDJFL

debe tenerse por efectiva la reparación integral que ha efectuado el Estado del daño moral sufrido por aquella, con motivo de las torturas y prisión política que padeció de parte de agentes del Gobierno Militar en Dictadura, reparación que de acuerdo a las circunstancias y la capacidad económica del Estado de Chile, debe estimarse suficiente, considerando, por una parte, que las torturas y dolor infringido al demandante, jamás podrían ser reparadas con suma alguna, pero también por otro lado, que el Estado también ha sido víctima de un gobierno de facto, que alteró la institucionalidad, precisamente, por los órganos llamados a defender al Estado y a las personas que lo componen, no pudiendo, entonces, responsabilizarse en forma exclusiva al Estado de Derecho de tales actos, quien de la misma forma estaba impedido de defender los derechos de sus ciudadanos y demás miembros del pueblo que lo conforman.

DÉCIMO CUARTO: Que, a mayor abundamiento, debe considerarse, también, que ha sido el propio Estado de Chile, el que ha propendido acciones para poder establecer quienes han sido víctimas de tortura y prisión política, durante el régimen militar, para poder, precisamente, tratar de efectuar las reparaciones que en Derecho corresponden, bajo un procedimiento administrativo más simplificado y que opera bajo el principio de la buena fe, evitando la judicialización del establecimiento de la calidad de víctima de violación a los derechos humanos.

DÉCIMO QUINTO: Que, como consecuencia de lo razonado en las motivaciones anteriores, deberá acogerse la excepción de reparación integral e improcedencia de la indemnización pedida, deducida por la demandada, por haber



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PVXWXFPDJFL

sido ya indemnizado la actora y desecharse la demanda, en virtud de ello.

DÉCIMO SEXTO: Que, sin perjuicio de lo referido precedentemente, deberá determinarse, a continuación, si se dan los presupuestos de derecho para poder acoger la excepción de prescripción opuesta, en subsidio de la anterior.

DÉCIMO SÉPTIMO: Respecto a la prescripción de la acción en materia de derechos humanos se debe considerar, que el sistema de responsabilidad del Estado deriva de los artículos 6° inciso tercero de la Constitución Política de la República y 3° de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, preceptos que, de aceptarse la tesis de la defensa, quedarían sin aplicación, siendo obligatoria su observancia, que por su parte los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, consagran que la responsabilidad del Estado por ilícitos de esta clase, queda sujeta a las reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas, ni hacer primar el derecho interno, dado que ilícitos imputable a un Estado, surgiendo de esa forma la responsabilidad internacional de éste por la violación de una normas de Derechos Humanos y como consecuencia nace el deber de reparación y de cesar los actos de vulneración denunciada.

DECIMO OCTAVO: De esa forma las normas de rango superior imponen un límite y un deber de actuación a los poderes públicos, y en especial a los tribunales de justicia, en tanto éstos no pueden interpretar los preceptos de derecho interno de un modo tal que dejen sin aplicación las normas de Derecho Internacional que consagran el derecho a la reparación, pues ello



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PVXWXFPDJFL

comprometería la responsabilidad internacional del Estado de Chile, ya que, el Derecho Internacional, traducido en Convenios y Tratados disposición constitucional, son vinculantes, como ocurre por ejemplo con la propia Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que se encuentra vigente en nuestro país desde el 27 de enero de 1980, que establece en su artículo 27 que el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, pues de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete la responsabilidad internacional del Estado

DECIMO NOVENO: Que, es por eso que la interpretación sistemática de las normas que recogen tanto la Ley 19.123 como la Ley 19.992, determina razonablemente concluir que el bono de reparación que en cada una de ellas se instaure en favor de ciertos familiares de ejecutados políticos y de las víctimas directas de delitos de violaciones a los derechos humanos, constituye un beneficio de carácter social, más no una indemnización del daño moral sufrido por ellos, pues no aparece que en la determinación de su monto se hayan considerado los elementos propios, individuales y personales de quienes debieron soportar el sufrimiento; requisito fundamental a la hora de fijar una indemnización que no puede ser entendida sino con la finalidad de reparar o compensar un daño cierto y determinado, sin existir entre ellos una incompatibilidad, la cual no fue establecida, pues en caso alguno importaron la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que autoriza la ley.

En consecuencia las Leyes 19.123, 19.992 y 20.874, no pueden desplazar la pretensión de resarcimiento del daño moral



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PVXWXFPDJFL

sufrido por la demandante, a lo que cabe añadir que los beneficios conferidos por dicha normativa sólo apunta a construir una política asistencial desarrollada por el Estado de Chile respecto de los familiares de las víctimas o de estas últimas; supeditados a condiciones objetivas para su goce, lo que evidencia que por sus características no se trata de una reparación total y efectiva del daño sufrido por los afectados.

VIGESIMO: En cuanto a la alegación de prescripción de la acción opuesta por el Fisco demandado, es necesario destacar que en los sucesos reseñados y que constituyen el fundamento de la acción, intervinieron agentes del Estado, lo que evidencia una contravención a lo preceptuado en el artículo 6° de la Constitución Política de la República, que obliga a los órganos del Estado a someter su acción a ella, a las normas dictadas conforme a la misma y al artículo 5° de nuestra Constitución, en cuanto el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana; siendo deber de aquellos respetar y promover tales derechos garantizados. Esta última disposición constitucional hace posible incorporar al derecho nacional las obligaciones contempladas en los instrumentos internacionales, tales como la de indemnizar íntegramente los daños cometidos por violaciones de los derechos humanos, la que, en consecuencia, adquiere rango constitucional.

VIGESIMO PRIMERO: Es así que al tratarse el presente caso de una demanda civil que se sustenta en un delito que, de acuerdo a la conciencia jurídica se denomina de “lesa humanidad”, se puede concluir que tal calificación no sólo trae aparejada la imposibilidad de amnistiar el ilícito y declarar la prescripción de la acción penal que de él emana, sino que



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PVXWXFPDJFL

también implica la inviabilidad de proclamar la extinción, por el solo transcurso del tiempo, del derecho de ejercer la acción civil indemnizatoria derivada del delito cuya existencia ha sido pacífica, de forma tal que este tipo de ilícitos, cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna

VIGESIMO CUARTO: Que, conforme lo señalado, se concluye que procede de la indemnización que se reclama, atendiendo al contexto en que se verificó el delito, esto es, en un momento de extrema anormalidad institucional, en que los hechores -agentes del Estado- en representación del gobierno de la época, como quedó asentado en el proceso, ejecutaron ilícitos de tal gravedad, que imponen al Estado de Chile la obligación de resarcir el daño causado, tal como se desprende del bloque normativo integrado, entre otros, por el Reglamento de La Haya de 1907, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Resolución 2005/35, de 19 de abril de 2005 de la Comisión de Derechos Humanos, que en su conjunto consagran el derecho a buscar y conseguir plena reparación, incluida la restitución, indemnización, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición, imponiendo tal resarcimiento al respectivo Estado que ha violado los derechos humanos de sus ciudadanos.

VIGESIMO QUINTO: Sin perjuicio de lo anterior, ahora cabe determinar el *quantum* del detrimento resultado de los agentes del estado, a lo cual se considera lo complejo de su determinación, dado que ningún monto podrá resarcir completamente a la ofendida, ni restablecerla a la situación anterior al acaecimiento de los hechos.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PVXWXFPDJFL

Sin embargo la indemnización por daño moral es meramente satisfactoria, lo que viene a significar que con ella se pretende una ayuda o auxilio que le permita a la víctima atenuar el daño,

VIGESIMO SEXTO: Que, ha quedado demostrado que la actora es víctima de violaciones a los derechos humanos, puesto que sufrió privación ilegítima de libertad y torturas por razones políticas, perpetrada por agentes del Estado, por ende, la pretensión indemnizatoria, claramente deriva de los padecimientos físicos y emocionales que ha tenido que sobrellevar; hechos que además, de no han sido controvertidos, pese a la falta de prueba presentada por la parte demandante al respecto, se consideraran prudencialmente y en relación a los montos recibos por las leyes especiales dictadas al efecto.

La suma que se fijará a título de indemnización, deberá pagarse reajustada de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor entre la fecha que la presente sentencia quede ejecutoriada y su pago; así reajustada, devengará intereses corrientes para operaciones reajustables en el mismo lapso

Por estas consideraciones, normas citadas, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 160, 170, 254 y siguientes, 342, 399, 426 del Código de Procedimiento Civil; 1437, 1556, 1698, 2314 del Código Civil; 1°, 4°, 6°, 7°, 19, 38 inciso segundo de la Constitución Política de la República; 1, 3 y 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 4.1 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1° de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; 6, 7 y 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas; La Convención



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PVXWXFPDJFL

Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; Los Convenios de Ginebra de 1949; Principios de Núremberg; y art.7° del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, se declara:

I.- Se acoge la demanda y se condena al demandado a pagar al actor, la suma de **\$20.000.000** (veinte millones de pesos) por concepto de indemnización de perjuicios, a título de daño moral.

II.- La suma ordenada pagar devengará reajustes e intereses en la forma establecida en el fundamento 26° de esta sentencia.

III.- No se condena en costas al Fisco de Chile, por no haber sido totalmente vencido.

Anótese, regístrese y notifíquese.

Pronunciada por doña Cecilia Pastén Pérez, Juez Suplente.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el Art.162 del C.P.C. en Santiago, a veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Acb./cpp



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PVXWXFPDJFL